

Justicia ambiental en Escocia

El movimiento ambiental de los más desfavorecidos en una nación del Norte

María Teresa Martínez Domínguez*

*No menos que un medioambiente decente para todos,
no más que un justo reparto de los recursos de la Tierra.*

Ésta es la máxima que define el trabajo de Amigos de la Tierra-Escocia (AdTE), posicionándose claramente como una organización que defiende la Justicia Medioambiental.

Hace siete meses empecé mi trabajo con AdTE como coordinadora del proyecto de Deuda Ecológica (deuda actual e histórica adquirida por los países más industrializados con las naciones del Sur, debido al abuso de los recursos naturales globales, destruyendo su forma de subsistencia y posibilidades de desarrollo). Para alguien que venía de trabajar como cooperante en un país del Sur, viviendo en comunidades amazónicas que defienden su territorio y recursos naturales hasta las últimas consecuencias, me sorprendió positivamente que una organización de la verde Escocia tomara por bandera este eslogan, más pro-



pio de voces del Sur, o de lo que se ha dado en llamar el movimiento ambiental materialista o movimiento ambiental de los pobres.¹ Comunidades repartidas por todo el mundo luchan por Justicia Ambiental, defendiendo sus recursos naturales y modos de subsistencia amenazados por la extensión capitalista del Estado. Citando ejemplos podríamos hacer un «Tour tóxico», desde el conflicto de la población indígena amazónica con la industria petrolera en el caso Texaco, responsable de la desaparición de más de un millón de hectáreas de bosque tropical, hasta las comunidades en el sur de Inglaterra afectadas por la compañía British Nuclear Fuels, a quién se le atribuyen más de 100 casos nuevos de cáncer por año.

El desarrollo del movimiento de Justicia Medioambiental se lo debemos a la comunidad negra, hispana y de raíces indígenas en los Estados Unidos, que se organizaron en los años sesenta para luchar contra las desigualdades de los servicios de protección ambiental de sus respectivas comunidades. Un estudio llevado a cabo en Massachussets, EE UU, comparaba la distribución geográfica de 17 tipos distintos de instalaciones potencialmente peligrosas para el medioambiente, con la renta y origen étnico de las comunidades próximas a estos lugares. Uno de los resultados del estudio fue que aquellas comunida-

*Coordinadora proyecto «Deuda Ecológica», Amigos de la Tierra (Escocia).

¹ GUHA, R. y MARTINEZ-ALIER, J. (1997), Varieties of Environmentalism: Essays North and South, Earthscan, London.



des con un ingreso medio de 30.000 US\$ o menor tenían como promedio 2-2,5 instalaciones más, que las comunidades con un ingreso medio de 40.000 US\$ o superior.²

AdTE ha contextualizado el análisis de Justicia Medioambiental, intentando combinar la necesidad de igualdad global e intergeneracional, en relación al consumo de recursos y salud ecológica, junto con la prioridad de actuar en el presente con las víctimas de estas desigualdades.

El primer gran discurso político del actual primer ministro escocés, Jack McConnell, fue en el tema de Justicia Medioambiental, y no en empleo, salud o educación. En febrero de 2002 el primer ministro decía en una conferencia sobre política ambiental: «así como la prosperidad económica y la justicia social deben ir mano a mano, a largo plazo el progreso económico y la justicia medioambiental en Escocia deben ir también mano a mano. Éste es nuestro reto para el siglo XXI y este gobierno quiere tomar la iniciativa».³

En mayo del mismo año tenía lugar la consulta sobre desarrollo sostenible con un apartado dedicado a Justicia Medioambiental. Aunque todavía queda mucho por hacer a nivel de concienciación, investigación, acciones políticas, y responsabilidades, el debate sobre Justicia Ambiental en Escocia está presente en el marco político actual.

Si bien en España también podemos encontrar muchos ejemplos de comunidades que sufren injusticias medioambientales (incineradora de Montcada i Reixac, el vertido del Prestige etc.), el movimiento de Justicia Ambiental no ha despegado y se encuentra muy lejos de poder ser utilizado como un instrumento de influencia política. El ejemplo de la campaña por Justicia Ambiental en Escocia puede inspirar y motivar a organizaciones, políticos y sociedad civil en España a trabajar de forma conjunta, e introducir como prioridad en sus políticas la Justicia Ambiental. Identificar, reconocer y combatir de distintas formas las injusticias medioambientales generadas a nivel nacional e internacional ayudará a reducir los impactos en la salud, en la economía y en el medioambiente que sufren las comunidades afectadas.

Para entender mejor este enfoque la primera parte del artículo describe brevemente el contexto económico y político de Escocia, la segunda parte son casos-estudio de comunidades y grupos de base con los que AdTE ha trabajado directamente

² DUNION, K. (2000), «Interaction between Social and Environmental Justice», Perspective on Environmental Justice, Scottish Executive Publications.

³ Scottish Executive News.

en nuestra campaña por Justicia Ambiental. La tercera parte incluye un análisis de las posibilidades de aplicación de Justicia Medioambiental, y por último describiré el enlace entre Justicia Medioambiental y Deuda Ecológica.

CONTEXTO POLÍTICO Y ECONÓMICO

Escocia, debido a su localización geográfica y a su economía periférica tiene muchas similitudes con países poscoloniales del Sur.⁴ La periferia se caracteriza por un pobre desarrollo económico, fuga de capital, exceso de dependencia de la inversión extranjera y ayudas públicas, menores niveles de control, y es normalmente una fuente de recursos naturales que beneficia a países del bloque central europeo. En Escocia hay altos niveles de pobreza, con un cuarto de los hogares viviendo por debajo de la renta media. Esto es debido principalmente a la etapa posindustrial en las áreas rurales y urbanas, aunque gran parte de la pobreza también se relaciona con la etapa preindustrial, y con un reparto de tierras totalmente desproporcionado, que todavía persiste en la actualidad y que ha llevado a una marginación geográfica y política de la población.

El joven parlamento escocés, creado en 1999, se instituyó con un compromiso de apertura, igualdad de oportunidades, reparto de poder y accesibilidad en la toma de decisiones. El primer ejecutivo se formó con una alianza de partidos de centro-izquierda, Partido Laborista y los demócratas liberales, con la mayor oposición representada por los tradicionalmente de izquierdas nacionalistas escoceses. Por representación proporcional, fue la primera vez en el Reino Unido que resultó elegido un parlamentario del partido verde, habiendo siete en la actualidad. Asimismo, la sociedad civil y un amplio consenso liberal se organizaron formando el Foro Cívico Escocés.

Entre los primeros cambios llevados a cabo en la primera legislación cabe resaltar la reforma agraria, terminando con 500 años de sistema feudal. Sin embargo, hasta ahora no sólo no se

permite la redistribución de las tierras sino que le otorga total propiedad a los dueños actuales. La lucha por la reforma agraria siempre ha sido una manifestación de conflicto de clases, aunque en los últimos años raramente ha sido asociada a naciones del Norte (apropiación de tierras en Honduras, o el movimiento de los «Sin Tierra» en Brasil).⁵

Aunque el ejecutivo escocés no ha conseguido hasta el momento articular una estrategia de desarrollo sostenible, si se ha posicionado a favor de acciones relacionadas con la Justicia Medioambiental, estableciendo un marco de acción en reciclaje, transporte y energía.

COMUNIDADES EN ACCION

El vertedero de Greengairs

Greengairs es una comunidad de clase trabajadora rodeada de canteras de carbón, que una vez abandonadas han pasado a convertirse en vertederos. El vertedero de Greengairs es el principal depósito de basuras de la ciudad de Glasgow (1,8 millones de personas) y alrededores.

El medioambiente de la comunidad de Greengairs está seriamente dañado debido principalmente a las preferencias urbanísticas por situar vertederos en áreas devastadas. A esto hay que sumarle la historia de desempleo y de exclusión en la toma de decisiones que ha sufrido la comunidad. En 1998 se descubrió que se estaba importando suelo contaminado con bifenilos policlorados (BPCs) procedentes de Hertfordshire en el sur de Inglaterra al vertedero de Shanks-Soluciones de Residuos, situado en Greengairs.

Una negligencia por parte de la agencia escocesa de protección ambiental permitió que la licencia de Shanks no se actualizase, y la empresa aprovechó este vacío legal de inmediato. La comunidad de Greengairs decidió movilizarse para bloquear el vertedero, y AdTE les facilitó información, apoyo técnico y organizacional. La compañía fue presionada a aceptar una serie de concesiones, entre ellas: poner fin al vertido tóxico, una inspección independiente del vertedero, y mejoras en la seguridad del mismo. Actualmente, la comunidad ha establecido un foro que se encarga de supervisar la zona y promover la inversión en mejoras medioambientales.

⁴ DUNION, K. (1996), «Living in the Real World», *Scottish Education and Action for Development*, Edinburgh.

⁵ KANE, L. (2000), «Popular education and the landless peoples' movement in Brazil (MST)», *Studies in Education of Adults*, vol 32(1), pp. 36-50.

La Super-cantera de Harris

En marzo de 1991 Redlands- Agregados S.L, ahora propiedad de la multinacional Lafarge, solicitó un permiso para extraer 10 millones de toneladas de roca por año durante 60 años de extracción en la montaña de Roineabhal, situada en la isla de Harris. Roineabhal es uno de los 20 sitios identificados en Escocia con potencial para desarrollar este tipo de supercanteras. Una extensión en el puerto de Lingerbay permitiría el transporte a granel, para ser utilizado en proyectos de construcción en Europa y el sureste de Inglaterra. Esta solicitud desencadenó la consulta pública más larga que ha tenido lugar en Escocia respecto a un proyecto urbanístico.

Tradicionalmente, el agregado ha sido un producto de bajo valor, extraído relativamente cerca del lugar de uso. En los noventa la demanda de este producto fue menor de lo esperado,⁶ dando lugar a operaciones de gran escala situadas en áreas remotas con el fin de evitar la hostilidad local que existe en el sur de Inglaterra en relación a la construcción de canteras. En vez de explorar como gestionar la demanda y optar por recursos alternativos y reciclables, las compañías de agregados eligieron la opción más fácil: ir a las zonas más aisladas, donde la población es más pobre y con menos capacidad de respuesta. Cuando la comunidad tuvo conocimiento de la escala de la operación, los ruidos e impactos en la salud, y los efectos negativos en la industria pesquera y el turismo, la opinión local cambió de un 62 por ciento a favor a un 68 por ciento en contra. El 3 de noviembre de 2000 el ministro de medioambiente rechazó la solicitud de Lafarge, aunque esta decisión fue motivo de apelación por parte de la compañía.

Finalmente, el 2 de abril de 2004, la compañía francesa Lafarge-Agregados anunciaba el abandono de sus planes para la construcción de lo que hubiera sido la cantera más grande de Inglaterra.

La incineradora de Douglas

En 1996 una incineradora de basuras situada en Dundee cerraba después de años de protesta por parte de la comunidad de Douglas, con el apoyo de AdTE. El cierre se debió principalmente a las nuevas regulaciones adoptadas por la Unión Europea en relación a los niveles de emisión. En 1999, una



sociedad de carácter público-privado construyó en Dundee una planta incineradora de «recuperación de energía a partir de residuos», a pesar de la fuerte oposición de la comunidad y de Amigos de la Tierra.

AdTE se opone radicalmente a la incineración como modo de gestión de residuos, pero trabajó con la comunidad para explorar posibles vías que pudieran exigir ciertas responsabilidades a la empresa. Finalmente, se negoció con la sociedad un «Acuerdo de buenos vecinos». Este modelo de acuerdo se originó en los Estados Unidos, y aunque no contribuye a una plena democracia económica, si proporciona un grado de protección a la comunidad frente a los modos de operar de las grandes industrias.⁷

Éste fue el primer acuerdo de este tipo alcanzado en el Reino Unido, y comprometía a la compañía a tener negociaciones con los representantes de la comunidad, proporcionar información, hacer una consulta sobre el plan de emergencia, mejorar las inversiones medioambientales, establecer rutas y

⁶ COWELL, R., JEHLICKA, P., MARLOW, P., y OWENS, S. (1998), «Aggregates, trade and the environment: European perspectives», report for the IUCN UK Committee.

⁷ LEWIS, S. y HENKELS, D. (1998), «Good neighbour agreements: A tool for environmental and social justice» en C. Williams (ed), Environmental Victims, Earthscan, London.

tiempos apropiados para el acceso de camiones, y potenciar el desarrollo económico y el empleo local.

Entre los numerosos casos de injusticias medioambientales en España se encuentran las comunidades afectadas por el vertido del Prestige así como por la débil regulación en el transporte de crudo en las costas españolas. Los fondos destinados a la investigación del caso Prestige han sido de 10 millones de euros, en comparación a los 270 millones invertidos en el desastre de Exxon Valdez.⁸ El equivalente de la incineradora de Douglas lo podemos encontrar en la incineradora de Montcada en Cataluña, que ha sido cerrada después de 30 años de funcionamiento. Durante todo este tiempo la movilización ha sido continua, gracias al trabajo conjunto de ciudadanos, comunidades, organizaciones medioambientales, uniones de trabajadores, y partidos políticos.

Este tipo de alianzas es en el que se basa el movimiento de Justicia ambiental, donde las ideas se desarrollan desde abajo por aquellos que sufren directamente las injusticias de la actividad económica.⁹ Los ejemplos citados anteriormente muestran distintas vías para hacer frente a las injusticias medioambientales. En ocasiones ejerciendo el poder mediante la acción directa (Greengairs), otras veces negociando concesiones (Douglas), o de forma indirecta reclamando responsabilidad al poder económico haciendo uso de nuestros derechos (Convención Europea sobre los Derechos Humanos, Convención de Aarhus etc).

Justicia Medioambiental: posibilidades de aplicación

Una demanda frecuente de las organizaciones no gubernamentales, es la mejora en el acceso a la justicia procesal y la institución de derechos ambientales constitucionales como medida de aplicación de Justicia Ambiental.¹⁰ La Convención Europea sobre los derechos humanos no establece derechos ambientales constitucionales, pero el artículo 8 que protege los derechos individuales en relación al respeto por el hogar y la vida familiar y privada, se ha utilizado en algunos casos europeos para proteger los derechos medioambientales.¹¹

La Convención también abre la puerta a derechos procesales en la actualidad negados en Escocia, por ejemplo el derecho a apelar en la toma de decisiones urbanísticas reservado hasta el momento solo a los constructores. La implementación de la Convención de Aarhus sobre el «acceso a información, participación pública en la toma de decisiones medioambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales, y el establecimiento de una comisión para la libertad de información» podría subsanar alguna de las faltas del sistema actual. No obstante la existencia de derechos procesales, legales y constitucionales iguales para todos no implica que las comunidades reciban un trato justo. Sin embargo, el entendimiento y reconocimiento social de las existentes injusticias medioambientales nos puede llevar a medidas colectivas de compensación.¹²

⁸ GARCÍA, R. (2003), «Prestige report», WWF.

⁹ SCANDRETT, E. (2002), Environmental Justice, Promoting health, politic and practice, chapter 2.3.

¹⁰ HAYWARD, T (2000) «Constitutional Environmental Rights: A case for political analysis», Political Studies, vol 48, pp. 558-72.

¹¹ Thornton, J. y ROMANS, S. (1999), «Human rights and environmental wrongs- Incorporating the European Convention on Human Rights: Some thoughts on the consequences for UK environmental law», Journal of Environmental Law, vol 11 (1), pp. 35-57.

¹² SCANDRETT, E., DUNION, K., McBRIDE, G. (2000), «The Campaign for Environmental Justice in Scotland», Local Environment, vol 5 (4), pp. 465-71.





De Justicia Ambiental a Deuda Ecológica: Educación Popular

Educación popular es un tipo de metodología basada en el trabajo del educador Paolo Freire con campesinos en Brasil. La filosofía de la liberación de Freire y otros movimientos populares de Latinoamérica se han utilizado como modo de aprendizaje colectivo y participativo para poder reaccionar frente a conflictos con los distintos niveles de poder.¹³ Junto con el trabajo de campaña para conseguir cambios legislativos y avances políticos en el campo de la justicia ambiental, AdTE considera vital el trabajo directo con las comunidades que sufren injusticias medioambientales. Este enfoque va más allá de la información sobre aspectos legales; la educación popular está basada en las experiencias diarias de cada individuo, liberándole de las fuerzas que le impedían tomar las acciones necesarias. Inspirándose en la figura de «Agente Comunal» creada en las zonas rurales del sudeste asiático, AdTE ha elaborado un curso para aquellos activistas que quieran formarse como Agentes de Justicia Ambiental. El curso está diseñado para que tanto el individuo como la comunidad se beneficien, desarrollándose la mayor parte del estudio en la propia comunidad

El trabajo con las comunidades que sufren injusticias medioambientales no sólo estriba en sus experiencias a nivel local, sino que se las invita a compartir y solidarizarse con la lucha por justicia ambiental de comunidades del Sur, encon-

trando fácilmente puntos de conexión a pesar de las grandes diferencias que nos separan.

Escocia, además de sufrir directamente injusticias medioambientales comparte la responsabilidad, junto a los demás países industrializados, de las injusticias medioambientales creadas a nivel internacional. La contribución de Escocia al daño ambiental global es totalmente desproporcionada en relación a sus necesidades. Por ejemplo, a pesar de tener una situación geográfica óptima para el desarrollo de energías renovables (montañas, altas precipitaciones, fuertes vientos, amplia costa), Escocia emite casi diez veces por encima de los niveles de CO₂ permitidos en su «Espacio Ambiental», la mayoría proveniente del uso de combustibles fósiles para la producción de energía doméstica e industrial.¹⁴

Escocia, al igual que España y la mayoría de países de la Unión Europea, tiene una deuda ecológica histórica que se remonta a la época del colonialismo. Esta deuda sigue acumulándose en la actualidad debido al abuso del Medioambiente Global, y a la falta de iniciativas políticas para el reconocimiento, compensación, y contención de la deuda ecológica.

El proyecto en Deuda Ecológica de AdTE pretende crear concienciación sobre este tema y como consecuencia promover la acción. Trabajamos fundamentalmente con comunidades en Escocia que sufren injusticias medioambientales, ya que consideramos que estos grupos son los que tienen una mayor capacidad de entender las injusticias globales que crea la deuda ecológica. A través de este entendimiento se forma una conexión entre comunidades que luchan en países del Sur y en el Norte que en muchas ocasiones desemboca en la toma de acciones para intentar crear un mundo un poco más justo.

¹³ KANE, L. (2001), *Popular Education and Social Change in Latin America*, Latin America Bureau, London.

¹⁴ *Friends of the Earth Scotland (1996)*, *Towards a Sustainable Scotland*, FoES, Edinburgh.